



1

Informes FIP

Desmovilización y reinserción en El Salvador

Lecciones para Colombia

Reporte preparado por
Alexandra Guáqueta
Mayo de 2005

Fundación **Ideas para la Paz**

Desmovilización y reinserción en El Salvador

Lecciones para Colombia

Reporte preparado por

Alexandra Guáqueta

Septiembre de 2005

Contenido

Resumen ejecutivo

Presentación

I. Introducción

II. Desmovilización, reconstrucción y paz sostenible

- La reincorporación como proyecto nacional
- El desmonte de las estructuras violentas
- Riesgos y oportunidades de la vinculación estratégica entre paz y DDR
- El proceso de DDR como tiempo de transformación
- La importancia de la reconciliación

III. Desarme y desmovilización

- Las dimensiones del desarme
- Zonas de “concentración” y atención inmediata
- Registro
- Tratamiento psicológico

IV. Reintegración integral

- Anticipación y flexibilidad
- Calendarización
- Poblaciones objetivo
 - Equidad entre grupos desmovilizados*
 - Cuadros y mandos medios*
 - Otras poblaciones vulnerables*
 - La comunidad local*
- Planes de vida y reinserción económica
 - Los recursos y los costos*
 - Tipos de programas*
 - Micro-empresas y empleo*
 - Becas educativas*
 - Acceso a propiedad rural y producción agropecuaria*
 - Vivienda*
 - Manejo y coordinación interinstitucional*
 - Organización y gestión de los desmovilizados*
- El rol del sector privado
- El rol de la comunidad internacional

V. Anexos

1. Programa taller “Lecciones de El Salvador”
2. Cifras de las desmovilizaciones individuales y colectivas en Colombia agosto 2002 - julio 2005
3. Desmovilizaciones colectivas - Autodefensas noviembre 2003 - julio 2005

Resumen ejecutivo

La desmovilización se ha convertido en uno de los temas más urgentes para la paz en Colombia. Desde el 2002, 16.579 menores, hombres y mujeres han dejado las armas - 7.781 en desmovilizaciones individuales y 8.798 autodefensas de forma colectiva en 15 turnos. Lo que suceda hoy con dichas desmovilizaciones será crucial para el futuro de Colombia. Los precedentes incidirán sobre los cálculos que las FARC y el ELN hagan en los siguientes años sobre cómo y qué negociar y si la desmovilización vale la pena. Por ello, la Fundación Ideas para la Paz ha querido, por medio de reflexiones analíticas, diálogos multi-sectoriales y propuestas prácticas, dar especial atención al desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de ex-combatientes. Una de nuestras iniciativas es la serie de talleres “Experiencias de Desarme, Desmovilización y Reintegración”. Aunque cada país y cada conflicto tiene rasgos particulares, el ejercicio de contraste con otros sirve para entender mejor nuestros propios retos. El 19 y 20 de noviembre de 2004 realizamos el primer evento, “Lecciones de El Salvador”, con auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y la participación del Bonn International Center for Conversion (BICC). Este documento recoge las principales discusiones y ofrece reflexiones prácticas para el manejo de DDR en Colombia. A continuación enunciamos los hallazgos más relevantes.

- DDR debe ser un esfuerzo nacional que requiere liderazgo político de alto nivel y una eficaz comunicación pública basada en un discurso de reconciliación incluyente y coherente. Pensar en el contenido, la estrategia de comunicación y las acciones concretas para generar confianza entre ex-combatientes y la sociedad es una tarea urgente.
- DDR es más que un conjunto de procedimientos y cronogramas: es un período de ajuste y transformación de rutinas e identidad. Por eso el tiempo de la reincorporación es importante y debe ser proporcional a la duración e intensidad del conflicto.
- El desarme tiene varias dimensiones: una estratégica, una simbólica y otra funcional. En Colombia, las armas recaudadas a desmovilizados colectivos e individuales son contadas, registradas y guardadas como material probatorio en caso de que la Fiscalía las solicite. Sin embargo, aún no hay claridad sobre qué hacer con las armas en el largo plazo. Expertos recomiendan destruirlas.
- La duración de las zonas de “concentración” y de los albergues debe ser suficiente para hacer los registros apropiados e informar a los desmovilizados sobre el proceso, pero no debe extenderse demasiado, pues retrasa la reintegración a la sociedad.
- El registro suele enfrentar obstáculos, como establecer quién hace parte o no de la estructura del grupo armado. De todos modos, los registros son indispensables para planear y hacer seguimiento a los programas de reincorporación.
- Es útil tener una instancia nacional de planeación estratégica y coordinación para agilizar la comunicación entre las diferentes agencias del Estado, enrutar sus acciones y tener una comunicación eficaz con las administraciones locales que deben ejecutar los proyectos de DDR.
- Experiencias como la de El Salvador indican que la desmovilización y reincorporación pueden afrontar crisis por desacuerdos entre las partes, el clima de polarización, excesiva politización del proceso o reticencia de actores locales a los programas de reinserción.
- La reincorporación tiene más oportunidades de éxito cuando los desmovilizados entran a formar parte de una comunidad. Las comunidades, sin embargo, no siempre están dispuestas a acoger a los desmovilizados por prejuicios, desconfianza o resentimientos. Por ello es útil diseñar programas que involucren a más beneficiarios, incluyendo otras poblaciones vulnerables.
- Cuando hay más de un grupo desmovilizado, incluyendo la reducción de las fuerzas armadas después de un conflicto, es importante ofrecer beneficios iguales a todos. Sin embargo, tener en cuenta

las jerarquías internas del grupo desmovilizado para otorgar un trato preferencial a los cuadros y mandos medios contribuye a mantener transitoriamente las estructuras de liderazgo y guiar al grueso de los desmovilizados en la reincorporación.

- La organización de los desmovilizados en ONG o partidos políticos puede facilitar las gestiones administrativas de la reinserción y servir como red de apoyo al grueso de los desmovilizados. Sin embargo, esto no garantiza el éxito de los programas, especialmente si la calidad de los servicios técnicos suministrados es deficiente.
- Conviene tener un portafolio variado de opciones económicas para la reinserción. Hay una amplia gama de apoyos: pagos de dinero en efectivo, dotaciones en especie (vestido, utensilios, alimento, material de construcción, vivienda), empleos en el sector público o privado, créditos para múltiples propósitos, capacitación y becas para educación superior. La variedad de opciones permite ajustarse a las preferencias y destrezas del desmovilizado, la disposición de recursos y las condiciones económicas locales.
- La posibilidad de que todos los desmovilizados se conviertan en micro-empresarios es difícil. Depende de buenos planes de negocios, acompañamiento técnico adecuado, las destrezas de la persona, acceso flexible a créditos y la existencia de demanda en el mercado.
- La participación del sector privado es indispensable, pues asegura una mayor probabilidad de éxito en los programas. El sector privado no sólo tiene capital de inversión sino conocimiento técnico y habilidades negociadoras y administrativas, sabe dar un uso eficiente al tiempo y a los recursos financieros, está habituado a enfocar su gestión hacia la obtención de resultados y posee una importante red de contactos comerciales y acceso a las autoridades. Sin embargo, la tendencia predominante es que los empresarios sean reticentes a dar empleo directo y, en general, a participar en DDR. Por ello, una campaña de acercamiento en-

tre el Estado y el sector privado, con planes concretos, es crucial.

- La comunidad internacional ha expresado reservas frente a los términos de la desmovilización en Colombia y, en parte, esto ha reducido los aportes internacionales a DDR. Es necesario lograr entender sus argumentos y a la vez procurar un mayor entendimiento de la comunidad internacional sobre DDR en Colombia. En el largo plazo Colombia deberá balancear la utilidad política y financiera de la asistencia, con la reducción del margen de maniobra que inevitablemente se presenta por los diversos intereses externos. Fuera de la ayuda, en dinero o especie, la comunidad internacional también podría colaborar realizando un seguimiento de largo plazo de DDR.

Presentación

La Fundación Ideas para la Paz ha querido, por medio de reflexiones analíticas, diálogos multi-sectoriales y propuestas prácticas, dar especial atención al desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de ex-combatientes. La desmovilización se ha convertido en uno de los temas más urgentes para la paz en Colombia. Desde comienzos del 2002 hasta hoy, 7.781¹ miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disidencias del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas (AUC) se han desmovilizado de forma individual. Y desde noviembre de 2003, como resultado de negociaciones con el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se han desmovilizado de forma colectiva 8.798² autodefensas en 15 turnos. La Ley de Justicia y Paz y la desmovilización de autodefensas, con todo y sus defectos, son un hecho. En total, 16.579 menores, hombres y mujeres han dejado las armas. Esto presenta múltiples retos para los colombianos en su intento de construir una paz duradera y hacer nación. Uno de los más sobresalientes tiene que ver con los precedentes que se vayan sentando. En Colombia, las negociaciones y reinserciones se han dado de manera escalonada en el tiempo, lo que hace que el pasado incida sobre la formación de expectativas presentes y futuras, y por consiguiente, en los cálculos de los grupos armados, por ejemplo el ELN y las FARC, sobre cómo y qué negociar y si la desmovilización, y por consiguiente la paz, vale la pena. De ahí la importancia de una reincorporación bien hecha. Además, el riesgo de no atender DDR es la perpetuación de formas de violencia y criminalidad que impiden la recuperación de autoridad por parte del Estado y la construcción de instituciones legítimas y democráticas cimentadas en un capital social positivo.

Una de nuestras iniciativas es una serie de talleres sobre DDR. Aunque cada país y cada conflicto tienen rasgos particulares, el ejercicio de contraste con otros y la identificación de sus acier-

tos y errores sirven para entender mejor nuestros propios retos y medir lo que hacemos en casa. Además, aunque Colombia ha sido pionera en la creación de programas de DDR --por las desmovilizaciones de comienzos de los noventas--, existen hoy visibles avances en los aspectos técnicos y administrativos de DDR, cuya implementación es válida para cualquier escenario. De esta forma, "Experiencias" busca suscitar una mirada analítica y crítica a la reintegración en Colombia con miras a formular recomendaciones concretas.

El 19 y 20 de noviembre de 2004 realizamos el primer evento, "Lecciones de El Salvador", con auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y la participación del Bonn International Center for Conversion (BICC). Asistieron funcionarios del gobierno de El Salvador que tuvieron a su cargo el diseño y la implementación del plan de reconstrucción de ese país en los noventas, ex-combatientes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior de Colombia, el Ministerio de Defensa, expertos, ONG y miembros de la comunidad internacional. Este documento recoge las principales discusiones de "Lecciones de El Salvador" y con base en ellas ofrece reflexiones y sugerencias prácticas para el manejo de la desmovilización en Colombia, teniendo en cuenta las particularidades de su situación. Antes que un estudio exhaustivo sobre la paz en El Salvador, hemos querido que el lector, en particular aquellos funcionarios a nivel nacional y local en Colombia que deben asumir responsabilidades en el tema encuentren, en un formato ágil y sencillo, ideas de DDR para Colombia. Agradecemos los comentarios de los participantes y de expertos internacionales amigos de la Fundación, al igual que la diligente asistencia de Gerson Arias.

Alexandra Guáqueta
Directora Académica
Fundación Ideas para la Paz

¹ Cifra a julio 31 de 2005.

² Cifra a julio 31 de 2005.

I. Introducción

A diferencia de los centroamericanos e incluso de los procesos en otros países como Angola y Mozambique, la desmovilización actual en Colombia se produce sin un gran acuerdo de paz entre todas las partes, ni con una estrategia de post-conflicto de reconstrucción nacional: ocurre de manera simultánea al conflicto armado. La yuxtaposición temporal con el conflicto tiene serias implicaciones para la reincorporación efectiva de los ex-combatientes. No les permite volver a su lugar de origen y son mayores sus problemas de seguridad y los de sus familiares. Las alternativas de empleo se reducen por los efectos acumulados de la guerra sobre la economía y se incrementan las posibilidades de reincidencia en las armas o actividades delictivas. No hay dividendos de paz para invertir en la reinserción, y emergencias humanitarias, como el desplazamiento, compiten por atención y recursos. Permanecen ausentes procesos de reconciliación con los organismos de seguridad pública, militares y policías, y sigue la desconfianza de los desmovilizados frente al Estado y de la sociedad frente a los ex-combatientes. No se puede apelar a las estructuras de mando de los grupos armados para guiar a los reinsertados en un proyecto político y social bajo las reglas de juego democráticas; hay fragmentación y poca articulación colectiva que genere sentido de pertenencia.

Además, el que en Colombia, a diferencia de la dinámica que se dio por ejemplo en El Salvador, las negociaciones y reinserciones se hubieran dado y se estén dando aún de manera escalonada en el tiempo, con unos grupos o partes de un grupo primero y con otros después, significa que el presente tendrá consecuencias sobre el futuro. Lo que suceda hoy incide sobre la formación de expectativas, y por consiguiente, los cálculos que los grupos remanentes, es decir, del ELN y las FARC, estén haciendo sobre cómo y qué negociar y si la desmovilización vale la pena, si ellos y sus familias tendrán condiciones de seguridad razonables, si tendrán oportunidad de participar en política y si los paquetes de beneficios económicos les permitirán subsistir y reintegrarse exitosa-

mente a la sociedad. Es mucho lo que está en juego; el fracaso podría bloquear la paz hacia delante y de ahí la importancia de políticas integrales y estratégicas de reincorporación y de programas bien administrados a nivel nacional y local.

También es posible que las negociaciones escalonadas incentiven a los combatientes activos a aumentar su condición de amenaza creíble para obtener más ganancias legales o económicas, o a sacarle el mayor provecho a la criminalidad dentro del esquema de la guerra para acumular impunemente un botín antes de dejar las armas. Al comparar el caso colombiano con las guerras y las negociaciones de paz en Centroamérica a comienzos de los noventa, se pone en evidencia que aquí las ganancias esperadas de los grupos armados son distintas. Allá, establecer un régimen democrático, legalizar la izquierda y reformar las fuerzas armadas constituyeron beneficios cruciales para los ex-combatientes del FMLN y por eso sus expectativas frente a los paquetes de reinserción fueron, al menos al comienzo, menores que aquellas que alcanzan a vislumbrarse entre guerrilleros y paramilitares en Colombia.

Por otra parte, es necesario reconocer que la desmovilización ocurre en un momento de transformación de la criminalidad asociada con la economía de guerra. La extorsión y el comportamiento mafioso figuran hoy de manera más notoria entre grupos armados y bandas criminales, y esta forma de lucro y de imposición coercitiva de autoridad minan la construcción de un Estado legítimo. Para un ex-combatiente la transición desde grupos armados mafiosos a mafias armadas es fácil, por sus destrezas y contactos. Por otro lado, la “democratización” del narcotráfico se traduce en mayores oportunidades de entrada para aquellos conectados con el negocio y las habilidades adecuadas.

El volumen y el corto tiempo en el que se han desmovilizado guerrillas y paramilitares representan un reto administrativo. El número de reinsertados como resultado de los procesos de paz con el

M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) entre 1990 y 1992 fue de 3.482 combatientes aproximadamente. Y las desmovilizaciones posteriores, la de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medellín y el Frente Francisco Garnica del EPL en 1994 y del Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos Armados (MIRCOAR) en 1998 sumaron 1.433 –cifras mucho menores a las de hoy. Para evitar su criminalización o reincidencia como guerrilleros o paramilitares cuando combatientes activos tratan de reclutarlos de nuevo, como ya se ha visto en Bogotá³, la sociedad tendrá que acogerlos. Por supuesto, los reinsertados deberán poner de su parte con buena conducta y gestos de reconciliación. De todos modos, queda claro que el compromiso es colectivo y se requiere apoyo del sector privado, pero buena parte de la responsabilidad administrativa recae sobre el Estado, lo que hace urgente pensar en su capacidad institucional.

Entre los retos políticos, que son distintos al pasado, está la falta de consensos en Colombia sobre cómo superar el conflicto. El debate que se produjo en círculos nacionales e internacionales durante los dos últimos años sobre el marco jurídico que precisó los beneficios jurídicos y obligaciones de los grupos armados o individuos que dejaran las armas recogió todas las aristas del problema: si debe aplicarse las mismas reglas a paramilitares y guerrilleros, hoy y más adelante; cuáles crímenes perdonar y cuáles juzgar; qué hacer con delitos de narcotráfico y cómo balancear la atención a los desmovilizados y las víctimas del conflicto, incluyendo a los desplazados. De todos modos, bien sea por una internalización más profunda de valores democráticos, la acumulación histórica de agravios o el perfil de los paramilitares y guerrilleros, el público está menos dispuesto que antes a olvidar las muertes, los actos terroristas y la apropiación forzada e ilegal de riqueza.

Asimismo el clima internacional es diferente. La tolerancia frente a violaciones de derechos humanos es menor y el régimen internacional de protección a los derechos, del cual Colombia ha querido ser parte, es más robusto que antes. Los amnistiados de otrora comparecen hoy ante cortes de su país o extranjeras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha expresado sus reservas frente los términos de negociación entre el gobierno Uribe y las autodefensas. Además, los actos terroristas y los conflictos armados se convirtieron en grandes enemigos de la seguridad global, por lo que la comunidad internacional parece menos dispuesta a perdonar a los perpetradores. No hay claridad aún sobre el margen de la justicia transicional, aquellas reglas de justicia para situaciones excepcionales, y el tratamiento a ex-combatientes.

Finalmente, organismos internacionales como Naciones Unidas y el Banco Mundial hasta ahora comienzan a explorar esquemas alternativos de construcción de paz, que eventualmente arrojarán ideas más claras sobre cómo tratar situaciones de conflicto y post-conflicto a la vez.

II. Desmovilización, reconstrucción y paz sostenible

La reincorporación como proyecto nacional

Los procesos de paz y la integración de ex-combatientes a las estructuras políticas, sociales y económicas de un país son un esfuerzo nacional que requiere liderazgo político de alto nivel y una eficaz comunicación pública. Esto se debe a que un proceso exitoso necesita la aceptación de las comunidades receptoras y la sociedad en general; aportes económicos extraordinarios en forma de donaciones, impuestos y creación de empleo; flexibilidad por parte de las instituciones financieras para otorgar micro-créditos; esfuerzos burocráticos adicionales por parte de las diferentes

³ “Grupos de autodefensas están reclutando a reinsertados en albergues de Bogotá”, *El Tiempo*, mayo 5, 2005.

entidades estatales a nivel nacional y local para atender tanto a desmovilizados como a otras poblaciones vulnerables; y la formulación e implementación de políticas públicas en temas sociales y económicos para generar condiciones favorables a la reincorporación y para la reconstrucción integral de las zonas afectadas por la guerra.

Por eso, en el caso de El Salvador, tanto miembros del FMLN como los funcionarios de gobierno encargados de la formulación y ejecución del Plan Nacional de Construcción, resaltaron la importancia de tener una instancia nacional de planeación estratégica y coordinación. En su caso, los salvadoreños encontraron que la existencia de un “plan maestro” de reconstrucción nacional de largo plazo y una oficina como la Secretaría de Reconstrucción Nacional fueron claves para coordinar las distintas agencias del Estado.

De otra parte, experiencias como la de El Salvador indican que la desmovilización y reincorporación pueden afrontar crisis por desacuerdos entre las partes, el clima de polarización, excesiva politización del proceso o reticencia de actores locales a los programas de reinserción. En El Salvador, por ejemplo, la renuencia de ocupantes de tierras que iban a readjudicarse puso en peligro no sólo el programa de reasentamiento humano sino toda la estrategia de reintegración e inclusive la paz misma, pues el programa de reforma agraria había sido una de las piezas claves de las negociaciones de paz. Además, los programas fueron susceptibles de revisiones y re-negociaciones.

La lección es que la naturaleza y magnitud del esfuerzo que implica la reintegración de ex-combatientes y los posibles giros y ajustes que ocurren durante el proceso demandan la movilización y la aceptación nacional. Para ello, tanto el Estado como los líderes desmovilizados necesitan cons-

truir canales de comunicación fluidos para informar y escuchar a la sociedad y hacerla parte de la reintegración, entendida como un elemento de la reconstrucción nacional. Se requiere, también, un discurso incluyente y coherente que dé sentido al proceso, que explique por qué la reintegración es útil y necesaria y que dé cuenta de sus avances, posibles retrocesos y retos.

El desmonte de las estructuras violentas

El proceso de paz de El Salvador es considerado como un caso exitoso: las partes se desmovilizaron, hubo una transición hacia la democracia y hasta el momento el conflicto no ha resurgido. Sin embargo, la violencia asociada con bandas criminales y grupos de seguridad privada que padece actualmente El Salvador suscita preguntas sobre el significado de la desmovilización, la reintegración y la construcción de paz sostenible⁴. La reflexión atañe especialmente a Colombia por las estructuras de poder político y económico local que aún mantienen los paramilitares después de su desmovilización, la conexión entre grupos armados ilegales, narcotráfico y extorsión, la disponibilidad de armas en los mercados legal e ilegal y la existencia una amplia gama de redes criminales.

Una reintegración efectiva de los grupos armados ilegales es más que renunciar a la membresía de un grupo armado, desintegrar la unidad de mando de un grupo o eliminar su título de guerra. El proceso de DDR es el desmonte real de formas de control político, militar, económico y social que están fuera de las instituciones legales. Para ello, los ex-combatientes deben ser acogidos por la comunidad, tener un sentido de apropiación frente a la idea de reconstrucción de nación, participar en actos simbólicos y prácticos de reconciliación,

⁴ En El Salvador la violencia del post-conflicto no proviene en todos los casos de los guerrilleros, militares y policías desmovilizados. Los jóvenes de las maras (pandillas), por ejemplo, no fueron combatientes en la guerra, pero es posible que algunos integrantes de grupos vigilantes sí hubieran sido parte de las fuerzas de seguridad pública. No obstante, la violencia y la criminalidad están asociadas a los efectos del conflicto (armas remanentes, deterioro económico, fragmentación del tejido social) y factores de oportunidad que hicieron posible el conflicto armado (falta de capacidad institucional). Por ello el post-conflicto debe incluir una reconstrucción institucional y del tejido social y la reintegración de ex-combatientes es un elemento indispensable.

formar parte de la economía legal y participar en la vida política siguiendo parámetros democráticos. Las armas remanentes deben eliminarse o quedar en manos del Estado, con un control adecuado.

Además, si se quiere evitar el resurgimiento del conflicto, como lo indica la experiencia internacional, o la mutación en otras formas de violencia y crimen, es indispensable atender los factores “profundos” de la fragmentación del orden y la tensión social. Es necesario acompañar cualquier acuerdo de paz entre opositores y la reintegración de ex-combatientes con un proyecto nacional de institucionalización; es decir, con el establecimiento de un orden político aceptado por todos y generalizado en el territorio nacional. Esto implica la reconstrucción colectiva, la amplia difusión y la internalización de normas que definan cómo es el acceso al poder, reglas para la aplicación de la ley, acceso a la justicia y fórmulas para mediar de una manera pacífica las transacciones entre los distintos actores de las sociedad. Asimismo, requieren atención factores sociales como la educación, la salud y el acceso a servicios públicos básicos, y oportunidades de empleo.

Riesgos y oportunidades de la vinculación estratégica entre paz y DDR

Las negociaciones de paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN que llevaron a los Acuerdos de Chapultepec de enero de 1992 no trataron en extenso cómo sería la reincorporación y cuáles los beneficios económicos de los ex-combatientes. El acuerdo definió y calendarizó la desmovilización haciendo sólo una alusión general a la necesidad de que las partes establecieran planes de reintegración y reconstrucción nacional. Fue estrategia explícita del FMLN no abordar el tema para evitar que el gobierno “comprara” al FMLN. Los detalles de la reincorporación fueron discutidos y negociados después, de forma casi continua durante los tres primeros años de la reintegración a través de una comisión gubernamental, una del lado del

FMLN y con la facilitación de organismos internacionales. En retrospectiva, las partes reflexionaron sobre las ventajas y desventajas de no haber planeado y negociado los programas de reincorporación durante las conversaciones de paz.

Por un lado, se evitó añadir complejidad a los acuerdos de paz y hacer vinculaciones estratégicas entre avances militares en el terreno y el tamaño de los beneficios económicos de los desmovilizados. Así, las negociaciones se enfocaron sobre la construcción colectiva de la democracia en El Salvador, en particular la inclusión de la izquierda en el sistema político, la reforma de los organismos de seguridad del Estado y la reforma agraria.

Sin embargo, la falta de planeación anticipada generó dificultades para la adecuada implementación de los programas de reintegración, especialmente porque ninguna de las partes tenía clara la magnitud del esfuerzo financiero, burocrático y político. Fue necesario establecer un esquema de negociación, comunicación y coordinación continua para responder a las necesidades de los ex-combatientes. El esquema requirió además, flexibilidad de las partes, tanto en sus expectativas como en la forma de ejecución de los programas. De todos modos hubo retrasos y descoordinación mientras se adecuaron las estructuras del FMLN y las instituciones oficiales para ejecutar las tareas necesarias.

A diferencia de El Salvador, en Colombia la mayoría de negociaciones de paz que se han dado desde comienzos de los noventa sí han abordado el tema de la reintegración. Aunque esto ha permitido anticipar algunos gastos y esfuerzos, es posible que la dinámica hubiera elevado las expectativas de los ex-combatientes frente a los paquetes de beneficios y generado vinculaciones entre el ritmo de la guerra y la reintegración. La desmovilización secuencial establece precedentes en cuanto a los niveles esperados de beneficios, tanto en lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer como en las demandas de los ex-combatientes. Cada vez los

programas se tornan más sofisticados y quizás más costosos. A esa consideración debe añadirse el hecho de que en el transcurso de los programas de reinserción suele generarse una relación de dependencia mutua entre el desmovilizado y el Estado, lo que convierte a los programas de reinserción y, en últimas, a la paz, en constante objeto de negociación.

El proceso de DDR como tiempo de transformación

Comúnmente se concibe al desarme, la desmovilización y la reintegración como el resultado de una negociación de paz y en fases consecutivas. Sin embargo, el caso de El Salvador muestra que la reincorporación de los ex-combatientes a la vida civil es un proceso que comienza incluso antes del desarme formal: durante la misma negociación. La participación de los combatientes en negociaciones o en la planeación de su futuro en escenarios distintos a la guerra desencadena cambios en sus expectativas de vida, incluyendo nociones sobre su papel en la construcción colectiva de una sociedad pacífica y viable. La experiencia indica que la reincorporación es más que un conjunto de procedimientos y cronogramas para desarmar a los ex-combatientes y darles una oportunidad de empleo legal. Es un período de ajuste y transformación de rutinas e identidad. Por eso el tiempo de la reincorporación es importante, no sólo para cumplir con la dimensión administrativa de la reincorporación a la vida civil, sino para otorgar un espacio para el cambio. Entre más largo e intenso el conflicto, es probable que el ajuste a una nueva vida requiera más tiempo. En El Salvador, los programas de reinserción duraron entre cuatro y seis años. En Colombia hay paramilitares y guerrilleros que llevan buena parte de su vida en el conflicto y otros que ingresaron recientemente. Es muy posible que los primeros enfrenten mayores dificultades en acoplarse a una vida civil en el campo o la ciudad y que el término actual de dos años, que viene aplicando para desmovilizados individuales, sea corto.

La importancia de la reconciliación

La reconciliación es un componente esencial para la transformación del desmovilizado y ayuda a generar apoyo nacional a favor de una reconstrucción más integral, más allá del cese al fuego. Cuando se piensa en DDR, la administración de la logística y los costos del desarme, las zonas de aglutinamiento y posteriormente la reintegración económica pasan a un primer plano, y la noción y los rituales de reconciliación tienden a quedar relegados. Sin embargo, tanto la experiencia en El Salvador, como en otras partes del mundo, señala la utilidad de dedicar recursos y esfuerzo a la reconciliación como proceso individual y colectivo.

La reconciliación ayuda al desmovilizado a hacer una ruptura entre su comportamiento de guerra y su nueva vida dentro de la legalidad, en la que el ejercicio de la violencia es limitado y regulado. Además, contribuye a tratar los traumas psicológicos y otras secuelas del conflicto armado. Por otro lado, un discurso nacional de reconciliación sirve para disminuir la desconfianza entre las partes combatientes y generar mayor receptividad en aquellas comunidades que serán futuros vecinos y empleadores de los desmovilizados. También es útil señalar que la reconciliación es de doble vía entre los adversarios. Todas las partes deben reconocer sus excesos durante la guerra.

Pero en términos concretos ¿de qué se trata la reconciliación? En El Salvador, uno de los mecanismos de reconciliación fue la Comisión de la Verdad. Conformada por notables nacionales e internacionales, investigó los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas por la guerrilla y el Estado. Posterior a la clarificación de los hechos, se promulgó una Ley de Amnistía. Adicionalmente, la participación política del FMLN, la reforma a los organismos de seguridad, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el fortalecimiento del sistema judicial y los mismos programas de reinserción fueron concebidos por la sociedad, el FMLN y el gobierno como acciones de reconciliación. Lo

que cada sociedad entienda por reconciliación dependerá de las características particulares de su conflicto, de todas formas, para lograr una paz sostenible, la receta deberá apuntarle tanto a las manifestaciones del conflicto como a sus causas profundas.

La reconciliación en Colombia tiene varios retos. Por la duración y extensión del conflicto armado, muchos han perdido familiares y amigos y padecido el secuestro y la extorsión. Las cicatrices son profundas; de ahí, en parte, la reticencia a acoger la desmovilización, las fuertes expectativas sobre la reparación a las víctimas e incluso las acciones de hostilidad contra desmovilizados y albergues⁵. La criminalidad en los grupos armados ilegales acentúa el punto; es más fácil perdonar una rebelión que excusar el lucro ilegal a través del narcotráfico, la extorsión o el secuestro. Finalmente, el rechazo colectivo que ha surgido en contra del conflicto armado y la violencia puede ser un arma de doble filo. Por un lado, sirve como sustento para dinamizar a la población en torno a diferentes fórmulas de superación del conflicto, pero por otro, puede volver más rígidas las exigencias a los ex-combatientes y al Estado. Al trazar marcas entre lo aceptable y lo imperdonable, se le ponen límites a la reconciliación y mayor énfasis al castigo. Por todo lo anterior, pensar en el contenido y la estrategia de comunicación de un discurso de reconciliación nacional y en acciones concretas mediante las cuales se genere confianza entre ex-combatientes y la sociedad, constituye una tarea fundamental en Colombia.

III. Desarme y desmovilización

Las dimensiones del desarme

El desarme tiene varias dimensiones: estratégica, simbólica y funcional. El desarme se convirtió para el FMLN en un asunto de estrategia en su relación con el gobierno durante el período de

la transición. El FMLN optó por no entregar todas sus armas en las primeras sesiones de desarme, a pesar de los acuerdos y el monitoreo de la ONU (misión ONUSAL), y guardó caletas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. La intención verdadera no era rearmarse para la guerra, sino tener a la mano, en caso de que fuera necesario, una amenaza creíble para presionar al gobierno en el cumplimiento de los acuerdos. No obstante, los arsenales escondidos suscitaban desconfianza en el gobierno y dejaron fuertes secuelas en la ONU y la comunidad internacional.

Al mismo tiempo, la entrega de armas fue un ritual de impacto para los ex-combatientes. El acto de entregar las armas, la dimensión simbólica, ayudó a reafirmar el fin de una etapa y el comienzo de otra en la cual el Estado tendría el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

Otro propósito del desarme es simplemente funcional: evitar que el remanente de armas facilite el resurgimiento del conflicto, supla a bandas criminales o se desvíe hacia otros conflictos. En general, el control de las armas que quedaron de los conflictos en Centro América fue débil y tanto los países de la región como Colombia se han visto afectados. En Centro América, la criminalidad violenta se halla exacerbada por la disponibilidad de armas ligeras y en Colombia, guerrilleros y paramilitares han aprovechado el mercado negro centroamericano para incrementar su capacidad bélica. En ambos casos el resultado ha sido centenares de muertes. Por eso, desde la perspectiva de algunos expertos, una de las lecciones más importantes de El Salvador es que la mejor opción son los programas de destrucción de armas o en su defecto verificaciones muy estrictas para evitar el reciclaje de armas. En el caso en que las armas no sean destruidas puede pensarse en el desarme por etapas durante varios años después de los acuerdos de paz y acompañado de programas que busquen cambiar la actitud de la población

⁵ Según el Programa de Reincorporación del Ministerio del Interior, 11 desmovilizados individuales fueron asesinados entre el 2002 y julio de 2005. En julio 15 de 2005 un albergue de Bogotá sufrió un atentado, la bomba destruyó parte del albergue y viviendas aledañas, "Fin de albergues que hay en Bogotá", *El Tiempo*, edición electrónica, julio 16 de 2005.

frente a las armas. Sin embargo, la retención de armas por el gobierno tiende a ser más dispendiosa y en últimas menos eficaz, pues frecuentemente se presentan casos de corrupción interna que alimentan el tráfico ilegal y por ello es necesario un control muy estricto. De cualquier manera es indispensable tener un registro de las armas entregadas o destruidas.

En Colombia, las armas recaudadas a desmovilizados colectivos e individuales son contadas, registradas y guardadas como material probatorio en caso de que la Fiscalía las solicite en investigaciones. Por ello, no se han destruido. Incluso, en el caso de los desmovilizados individuales, las armas pasan por un peritaje balístico; es decir, se busca si han estado asociadas a crímenes investigados por las autoridades. Sin embargo, aún no hay claridad sobre qué hacer tanto con las armas de las autodefensas como las de los desmovilizados individuales en el mediano plazo y no se está investigando sistemáticamente la proveniencia de las armas con miras al desmantelamiento de redes de tráfico.

Zonas de “concentración” y atención inmediata

La duración de las zonas de “concentración” rurales o urbanas debe ser limitada. La primera etapa de la desmovilización suele hacerse en áreas previamente delimitadas y con accesos restringidos, lo que facilita el desarme, la seguridad de los ex-combatientes, el registro, la asistencia básica y la comunicación con los desmovilizados para guiarlos en los procedimientos de DDR. Según la experiencia internacional, la prolongación de la etapa tiene varios riesgos; por ejemplo, la urbanización de los campamentos, el no retorno de los desmovilizados a sus hogares, el retraso de las actividades de reintegración social y económica que maduran la transición de los desmovilizados

hacia la vida civil, desconfianza frente al Estado, frustración y ansiedad entre los ex-combatientes e incubación de criminalidad. El FMLN tuvo una experiencia positiva. La concentración duró seis meses y se hizo en 15 centros regionales, con cobertura en todo el territorio. Allí se prestó la “atención de emergencia” con viviendas temporales, alimentación y vituallas y atención médica. Se atendieron 7.000 personas y la inversión fue de \$8.2 millones de dólares.

En este aspecto, la desmovilización individual y urbana en Colombia necesariamente sigue un esquema distinto a la colectiva y rural. En la práctica el desmovilizado puede pasar desde dos semanas hasta varios meses en el lugar donde se entregó, por ejemplo un batallón o una estación de policía. Después es asignado a un albergue (45%) o a un hogar independiente (55%) por dos años⁶, mientras completa la reintegración. Por distintas razones el esquema de los albergues en las ciudades, principalmente Bogotá, ha presentado muchas dificultades --a tal punto que en julio de 2005 el sistema entró en crisis y el gobierno propuso desmontarlos⁷. Entre los problemas están la ausencia de actividades programadas para ocupar el tiempo libre de los desmovilizados y su segregación del resto de la comunidad.

Registro

Es fundamental contar con un registro de los combatientes a desmovilizar con el fin de evitar que se filtren personas no vinculadas al grupo que se desmoviliza, hacer un control eficaz sobre el desarme, diseñar los programas de atención inmediata y reincorporación y estimar gastos. Los registros, además, requieren coordinación entre todas las agencias involucradas para intercambiar y sistematizar información, libre acceso de estas agencias a información básica sobre los desmovilizados y capacidad técnica.

⁶ Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa. Los albergues son hogares colectivos que reúnen a miembros tanto de autodefensas como de guerrilla, mientras que los independientes son otorgados, por razones de seguridad o buena conducta, a un solo desmovilizado con su núcleo familiar.

⁷ Para una discusión detallada ver Fundación Ideas para la Paz, “Reinserción sin reconciliación”, *Siguiendo el conflicto*, no. 22, julio 22, 2005.

En El Salvador, la elaboración de registros enfrentó algunos obstáculos, entre ellos establecer quién hacía parte de la estructura del FMLN y si se contaba sólo a las estructuras militares o aquellos simpatizantes que normalmente estaban dentro de la legalidad. La organización de los grupos armados subversivos es distinta en cada caso, pero todos suelen hacer trabajo político. Así, hay personas menos o más conectadas con el grupo armado cuya afiliación a éste es difícil de establecer. En Colombia, por ejemplo, es complejo determinar si alguien hace parte o no de una red de apoyo organizada de las autodefensas o la guerrilla.

De acuerdo con la experiencia de El Salvador y otros lugares también es posible que otras poblaciones vulnerables, como desplazados, desempleados o personas en condiciones de extrema pobreza, quieran beneficiarse de los programas de reinserción económica. En Liberia, por ejemplo, se pasó de un cálculo de 18 mil combatientes a 80 mil personas reclamando los beneficios de la desmovilización. En El Salvador tanto los funcionarios de gobierno como el FMLN estaban conscientes de este dilema, lo que contribuyó a sustentar la creación de programas “mixtos” que involucraron a distintas poblaciones. En ocasiones, ambas partes ejercieron flexibilidad en la asignación de beneficios. No necesariamente es perjudicial, en términos sociales, dejar que en circunstancias excepcionales, otros se beneficien de los programas de ayuda económica.

Tratamiento psicológico

En El Salvador se encontró que la mayoría de los desmovilizados enfrentan traumas psicológicos relacionados con la guerra. Han perdido amigos y seres queridos, han cegado la vida a otras personas, sienten que su vida está en permanente peligro, experimentan soledad por no poder compartir información, vivencias y sentimientos, y padecen angustia e incertidumbre mientras encuentran esquemas que le den sentido a la nueva etapa de vida. Con frecuencia, las secuelas de la gue-

rra le causan al desmovilizado dificultades en sus relaciones familiares y en el trabajo. El tratamiento psicológico es tan importante como los demás componentes de DDR.

IV. Reintegración integral

Anticipación y flexibilidad

El proceso de reincorporación de ex-combatientes a la vida civil requiere enormes esfuerzos de carácter administrativo, logístico y financiero, y por eso es útil anticipar y planear. Las experiencias internacionales sugieren que es óptimo tener un marco legal que regule no sólo el desarme, la situación jurídica de los ex-combatientes y la indemnización a las víctimas, sino la forma y duración de los apoyos económicos.

Pero difícilmente es posible anticipar todos los detalles de la reincorporación y por eso es necesario ser flexible, por ejemplo, para articular la participación de otros actores como ONG y empresarios, agilizar la contratación de entidades ejecutoras y compras, asignar responsabilidades de agencias del Estado y hacer ajustes ágilmente de acuerdo con las necesidades locales. En El Salvador, dado que durante las negociaciones de paz no se habían definido planes para la reintegración, la flexibilidad fue esencial. La reintegración se manejó a través de un grupo permanente con representantes del gobierno, la Secretaría de Reconstrucción Nacional, representantes del FMLN vía la Fundación 16 de Enero y facilitadores de ONUSAL. El seguimiento constante permitió subsanar la falta de planeación inicial y ajustarse a las particularidades del proceso. No obstante, existen riesgos. En ocasiones hubo desgaste personal y político de los involucrados, puesto que se incrementaron las posibilidades de fricciones y desacuerdos. El compromiso férreo con la paz y la mediación en el día a día de los donantes internacionales evitó que dicho desgaste tuviera repercusiones profundas en el proceso como tal.

Qué tanta flexibilidad se le otorga al Estado para administrar la reincorporación de los ex-combatientes depende de la confianza entre los desmovilizados, el Estado y la sociedad en general. Si se perciben riesgos de malversación de fondos, el esquema tenderá a ser rígido. La participación activa de la sociedad civil y los desmovilizados en el seguimiento a la desmovilización, por ejemplo, a través de una comisión veedora, puede ser útil para atender imprevistos y ganar flexibilidad.

Calendarización

Establecer cronogramas contribuye a organizar las actividades de DDR y hacerle seguimiento al cumplimiento mutuo de los compromisos adquiridos. Si bien no todos los detalles de DDR fueron planeados en El Salvador, la calendarización de las negociaciones de los acuerdos de paz y las etapas de DDR ayudó a darle ritmo y continuidad a la reincorporación de los desmovilizados mediante la identificación de plazos y tareas concretas para llevar a cabo. Además, el ejercicio propició consensos sobre el desarrollo y la implementación de los programas de reinserción.

Poblaciones objetivo

Equidad entre grupos desmovilizados

Cuando hay más de un grupo desmovilizado, incluyendo la reducción de las fuerzas armadas después de un conflicto, es importante ofrecer beneficios iguales a todos. En El Salvador se aplicó el principio de equidad entre miembros del FMLN, la policía y los militares para desactivar la animosidad entre los dos bandos. Sin embargo, por razones estratégicas, se dio un tratamiento preferencial a ciertos desmovilizados de acuerdo con las jerarquías internas. En Colombia, el tipo de beneficios recibidos por desmovilizados individuales y colectivos en esta etapa sentará un precedente para las expectativas de futuros desmovilizados del ELN y las FARC, e incluso para la eventual reducción de las fuerzas armadas. Esa

idea será importante para planear anticipadamente hacia el futuro.

Cuadros y mandos medios

Tener en cuenta las jerarquías internas del grupo desmovilizado para otorgar un trato jurídico preferencial y asignar paquetes de beneficios económicos contribuye a mantener transitoriamente las estructuras de liderazgo, que a su vez son útiles para guiar al grueso de los desmovilizados en la reincorporación. En El Salvador 600 de los comandantes del FMLN recibieron un trato diferencial. Tuvieron acceso a mayores subsidios de vida, micro-créditos, capacitación, becas, vivienda o tierra. Más allá del debate sobre si la medida era justa o no, el respeto por las jerarquías internas aseguró la voluntad de los mandos al ofrecerles una alternativa de autoridad y prestigio. Esto logró que los acuerdos negociados con los comandantes se volvieran incluyentes para todos los combatientes porque aún respetaban su liderazgo. Las decisiones tomadas por los negociadores se irradiaban a todos los extremos de la estructura a través de la línea de mando y se evitó que la incertidumbre de los combatientes, un aspecto propio de dichas transiciones, minara la voluntad de dejar las armas. Por otra parte, el esquema tuvo ventajas administrativas: permitió delegar tareas de ejecución y monitoreo de los programas de reinserción a los mandos medios, los cuales tenían más fácil acceso a la población desmovilizada que las agencias de gobierno. Esto incrementó la eficacia de los programas.

En este sentido, la desmovilización individual en Colombia presenta retos importantes para aprovechar el rol de los dirigentes y cuadros porque ocurre desarticulada de la dinámica grupal. En el caso de las autodefensas, se presentó una erosión de la autoridad de los comandantes por la incertidumbre de los términos de las negociaciones y el tiempo que permanecieron en Santa Fe de Ralito alejados de sus tropas. Por otra parte, cabe mencionar que ni los programas de desmovilización ni la ley colombiana contemplan la diferenciación

que se dio en El Salvador y habría que pensar las opciones en caso de una futura negociación con las guerrillas.

El caso de El Salvador también dejó ver que los dirigentes y mandos medios tienden hacia una vocación política. De ahí que sus expectativas frente a los paquetes de reinserción sean distintas. Ellos suelen estar más interesados en cómo articularse en organizaciones o partidos políticos y expresar sus opiniones en foros y medios. Por ello, tanto para el caso de los desmovilizados individuales como colectivos, puede esperarse que los ex-combatientes de la guerrilla y las autodefensas busquen mecanismos de participación política y que quieran participar en elecciones locales y nacionales bien sea de forma directa o movilizandobases.

Otras poblaciones vulnerables

Los esquemas de reinserción pueden atender a desplazados, víctimas de la guerra y comunidades que los reciben. Además, los programas conjuntos son útiles para la reconciliación y la integración de los desmovilizados a una comunidad. Una de las preocupaciones típicas de DDR es asegurarse que no haya oportunistas aprovechando los beneficios jurídicos y económicos y por ello se recomiendan mecanismos eficientes de identificación y registro. Sin embargo, el deseo de evitar filtraciones puede terminar excluyendo a otras poblaciones igualmente vulnerables y en riesgo de verse involucradas en formas recicladas de violencia. Además, la exclusión suscita rechazo frente a los desmovilizados. En El Salvador, parte de la flexibilidad del comité encargado de la reintegración de ex-combatientes tuvo que ver con la atención a otras poblaciones. En Colombia las poblaciones desmovilizadas y desplazadas han recibido ayudas diferentes y manejadas por agencias estatales distintas. Es posible que haya oportunidades de aprendizaje, sinergia y economías de escala entre las oficinas y organismos activos en una y otra actividad.

La comunidad local

La reincorporación tiene más oportunidades de éxito cuando los desmovilizados entran a formar parte de una comunidad. Hacer parte integral del tejido social es fundamental para la transformación del desmovilizado y su asimilación de rutinas no violentas. Las comunidades, sin embargo, no siempre están dispuestas a acoger a los desmovilizados por prejuicios, desconfianza o resentimientos. Para estimular la voluntad de la comunidad y contribuir a la construcción de una identidad colectiva es útil destinar programas sociales a toda una comunidad receptora y no sólo al desmovilizado de manera individual.

Planes de vida y reinserción económica

Los recursos y los costos

Existen varias fuentes para financiar la reinserción: fondos de inversión social del gobierno, créditos públicos y privados, donaciones de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros a través de sus agencias de cooperación, préstamos blandos del Banco Mundial y donaciones de ONG. La consecución de los fondos puede hacerse a través del gobierno o directamente por ONG de desmovilizados (para eso deben estar organizados). Y los costos dependen de la oferta y la demanda, es decir, de la capacidad económica del Estado y el tamaño de la economía (y la voluntad del conjunto de la sociedad), y de las expectativas de los ex-combatientes.

En El Salvador, los costos iniciales de la reinserción del FMLN fueron estimados en 100 millones de dólares aproximadamente para cubrir cerca de 13.000 beneficiarios por un lapso de 3 a 5 años, es decir, entre 1.500 y 2.500 dólares por persona por año (a precios de 1992). Alemania, Estados Unidos, Suecia y la Comunidad Europea fueron los mayores donantes. En retrospectiva, tanto ex-combatientes como funcionarios del gobierno pensaron que la disponibilidad de recursos

fue insuficiente y que algunos recursos fueron utilizados ineficientemente. Además, buena parte de los ofrecimientos internacionales no fueron cumplidos en el monto programado y en el tiempo previsto.

En Colombia, los cálculos del Departamento Nacional de Planeación⁸ estiman que la reinserción puede costar alrededor de 10.000 dólares⁹ por persona en un año bajo el esquema de desmovilización individual, sin contar posibles gastos administrativos adicionales por parte del Estado para la contratación de personal encargada de manejar el proceso. Los costos actuales de la desmovilización (a cargo del Ministerio de Defensa) y la reinserción (a cargo del Ministerio del Interior) por persona al año, para un periodo de tres años, es de 8.025 dólares¹⁰ – cifras considerablemente superiores a las de El Salvador.

Qué tanto son subsidios o créditos depende del esquema que cada país resuelva adoptar. En la experiencia del BICC la asistencia directa no debe durar mucho tiempo porque alimenta la dependencia del desmovilizado. Otras experiencias colombianas en emprendimiento social también alertan sobre los efectos perversos del asistencialismo. Quiénes deben o no ser los receptores del dinero de manutención depende de las condiciones locales. En Nicaragua, por ejemplo, el pago de las cuotas se hizo a las esposas de los ex-combatientes para evitar su despilfarro. Fuera de las condiciones anteriores, en Colombia debe haber precaución con los pagos de manutención especialmente si las estructuras de los grupos armados, como en el caso de los paramilitares, no han sido totalmente desarticuladas. En general, los pagos de manutención y los programas de reinserción económica deben ser instrumentos

para que los desmovilizados puedan entrar a competir en el mercado en igual condición que el resto de la población. No son un premio de guerra. De todos modos debe haber un balance frente a las expectativas de los desmovilizados, pues se corre el riesgo de truncar su proceso de reinserción a la legalidad.

Tipos de programas

Conviene tener un portafolio variado de opciones económicas para la reinserción. Hay una amplia gama de apoyos, desde pagos de dinero en efectivo, dotaciones en especie (vestido, utensilios, alimento, material de construcción, vivienda), empleos en el sector público o privado, créditos para múltiples propósitos, capacitación y becas para educación superior. La variedad de opciones permite ajustarse a las preferencias y destrezas del desmovilizado, la disposición de recursos y las condiciones económicas locales. Por ejemplo, tanto el gobierno como la dirigencia del FMLN calcularon que no todos los ex-combatientes, por su edad y su perfil, lograrían crear sus propias microempresas y por eso diseñaron rutas alternas para la reinserción, como la educación y la entrega de tierras para la manutención básica a través de la actividad agropecuaria¹¹. Cualquier proyecto debe estar respaldado por estudios técnicos de buena calidad, ejecutores idóneos y líneas de base para hacer el seguimiento adecuado, dicen aquellos funcionarios públicos que participaron en la DDR en El Salvador. Estudios sobre aptitudes y perfiles de los desmovilizados ayudarán a encaminar sus decisiones. Por otra parte el tiempo y el espacio para la transformación a través de actividades estructuradas son tan importantes como encontrar un empleo sostenible, de ahí el valor de tener va-

⁸ El informe hace cálculos para distintos modelos de DDR. Esta cifra corresponde a las opciones con educación superior y técnica y proyectos productivos, María Eugenia Pinto, Andrés Vergara y Yilberto La Huerta, *Diagnóstico del programa de reinserción en Colombia: mecanismos para incentivar la desmovilización voluntaria individual*, Bogotá, DNP, Dirección de Justicia y Seguridad, 2004, p.59.

⁹ 24 millones de pesos con tasa de cambio de 2.400 por dólar.

¹⁰ 19.26 millones de pesos con tasa de cambio de 2.400 por dólar. Cifras presentadas por el Ministerio del Interior en el taller "Proyecto piloto de reinserción individual urbana y sector privado", llevado a cabo por la Fundación Ideas para la Paz en marzo 15 de 2005.

¹¹ Las rutas alternas al emprendimiento fueron inspiradas en el caso colombiano, del M-19, tras una visita de los salvadoreños a Colombia al inicio de su proceso de desmovilización.

rias opciones de actividades para ocupar al desmovilizado.

Micro-empresas y empleo

La posibilidad de crear micro-empresas depende de buenos planes de negocios, acompañamiento técnico adecuado, que el desmovilizado tenga destrezas relevantes, acceso a créditos flexibles y sostenidos y la existencia de demanda en el mercado. A nivel internacional es frecuente encontrar que los programas de reinserción económica otorgan micro-créditos para que el desmovilizado genere su propia empresa agrícola o rural, pero los fracasos han sido muy frecuentes. De acuerdo con un estudio de la Fundación 16 de Enero, la mayoría de micro-empresas urbanas, e igualmente los proyectos agrícolas, no lograron ser rentables después de 2 a 3 años de su creación y los desmovilizados no tenían capacidad de pagar los créditos blandos otorgados por el gobierno o acudir a otras fuentes de financiación¹².

Los obstáculos para el éxito varían. La elaboración de los planes de negocio suele estar a cargo de funcionarios públicos con poca experiencia en emprendimiento o que sencillamente no dan abasto para diseñar y hacer seguimiento adecuado a cientos de planes individuales de negocios. La capacitación gerencial y vocacional que se le brinda a los desmovilizados no es adecuada si no tiene en cuenta las bases educativas y psicológicas de los desmovilizados. A veces la capacitación no es suficiente. Los requisitos de las entidades financieras privadas o públicas para otorgar créditos son muy estrictos y los montos son insuficientes. Finalmente, la estructura de la economía local, que a su vez está conectada con el mercado global, puede determinar la sostenibilidad de un negocio y por eso éste debe estar sustentado con un estudio de mercado, o en su defecto tener un arreglo previo que garantice por un tiempo generoso la compra del servicio o producto. Como se mencionará más adelante, la participación del

sector privado en esto es clave. Finalmente, no todos los desmovilizados tienen las habilidades para convertirse en pequeños empresarios, especialmente si son jóvenes, no han tenido capacitación técnica relevante y no han estado acostumbrados a tomar decisiones autónomamente por estar sujetos a estructuras de mando altamente jerarquizadas como ocurre en los grupos armados ilegales.

La generación de empleos directos para desmovilizados típicamente enfrenta el escepticismo de la grande y mediana empresa por la falta de calificación de los ex-combatientes y porque los empresarios temen por su seguridad personal. Además, como ha ocurrido en El Salvador, no es fácil encontrar soluciones de empleo en países de menor desarrollo económico. Allá, la recuperación económica del post-conflicto ha sido particularmente difícil: a la carga financiera típica de las reconstrucciones después de una guerra se sumaron los efectos de la liberalización de mercados. De todos modos, bien sea para la creación de micro-empresa o empleos directos es importante alinear los incentivos del sector público y el privado, por ejemplo con asignación de recursos adicionales o incentivos tributarios.

Becas educativas

Las becas para capacitación técnica y universitaria son particularmente útiles para dirigentes, cuadros y mandos medios, y por medio de convenios con centros educativos los cupos son relativamente asequibles. En El Salvador los programas de becas incluyeron además los costos de libros y manutención y la totalidad del apoyo estaba sujeto al buen desempeño académico. En términos generales, estos programas ayudaron a brindar ese tiempo de transformación indispensable para el ex-combatiente.

¹² Fundación 16 de Enero, *De la Esperanza a la realidad. 4 años de inserción del FMLN*, San Salvador, 1996.

Acceso a propiedad rural y producción agropecuaria

La redistribución de tierras o acceso a propiedad rural y urbana requiere mecanismos ágiles y confiables de acopio de información, una titulación ágil, la capacidad del gobierno para hacer cumplir los compromisos de viejos propietarios que debían entregar sus tierras y el acompañamiento técnico y financiero para la explotación agropecuaria en función del mercado.

En El Salvador, la concentración de la tierra y la Reforma Agraria fueron componentes políticos esenciales del conflicto y la negociación respectivamente. Por eso los Acuerdos de Paz dedicaron un espacio importante a tratar la redistribución de tierras y la transferencia se convirtió en un programa clave de la reinserción de ex-combatientes. El programa transfirió dos tipos de predios: tierras del Estado y tierras privadas que sobrepasaran los límites de hectáreas estipuladas en la Reforma Agraria (los “excedentes”). También legalizó la propiedad de tenedores campesinos en zonas de conflicto por medio de compras voluntarias a sus propietarios originales. Para ello contaron con tres instrumentos: un censo, un mecanismo para la titulación y legalización de tierras y un Banco de Tierras encargado de hacer las transferencias y las compras. Así fue como se transfirieron 56.494 hectáreas bajo el esquema de explotación colectiva y propiedad “pro indiviso” – para evitar la reventa y una posible contra-reforma. Esquemas parecidos se adoptaron en otras partes, por ejemplo en Zimbabwe, donde el cultivo se hizo obligatorio y la venta prohibida durante un tiempo definido.

El proceso fue política y administrativamente complejo -en las decisiones finales medió ONUSAL. Estas son algunas de las lecciones. El proceso debe ser monitoreado por una comisión con legiti-

dad para evitar la corrupción en la venta y compra de tierras. Los censos de tierras y personas deben hacerse en un lapso relativamente corto. La transferencia debe estar acompañada de un paquete integral de ayudas financieras, créditos, capacitación técnica y un plan de negocios para la comercialización del producto. El acompañamiento debe tener en cuenta los ciclos del producto y durar mínimo 5 años. El tamaño de los predios debe obedecer a las necesidades del proyecto.

En Colombia las discusiones sobre desmovilización y tierras se han centrado sobre cómo expropiar aquellas tierras adquiridas ilegalmente por los grupos armados, en particular las autodefensas, y destinarlas a la reparación de víctimas¹³. De otra parte, se han discutido opciones de proyectos productivos para la reinserción económica de los desmovilizados. Ambos tienen retos, entre ellos el testaferrato y el hecho de que el conflicto está en curso¹⁴. En cuanto a la desmovilización, y otras poblaciones vulnerables como los desplazados, sería útil explorar el uso de las tierras del narcotráfico, especialmente ahora que la ley reformada ha acelerado la expropiación manejada por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Por otra parte, Colombia ya tiene experiencia acumulada en proyectos productivos – programas de desarrollo agrario, proyectos de desarrollo alternativo implementados desde los ochentas como parte de la política anti-drogas, programas de desarrollo y paz, inversión social de grandes empresas, por ejemplo de petroleras, y programas de atención a desplazados, entre otros. Este camino recorrido servirá a la hora de diseñar programas económicos para el uso de las tierras entregadas. De todas formas hay ajustes que podrán hacerse para estimular el uso productivo de tierras rurales, en especial en cuanto a los sistemas de créditos y garantía y la valoración de la tierra.

¹³ Ver por ejemplo Artículos 10 y 24 de la Ley de Justicia y Paz.

¹⁴ En el pasado, por ejemplo, desmovilizados de los noventas que entraron a Programas de Tierras tuvieron que dejar sus nuevos predios por problemas de seguridad asociados al conflicto, Carlos Franco, “Apuntes a la reinserción económica”, en Ministerio del Interior, Instituto Luis Carlos Galán, *De las Armas a la Democracia* (Bogotá, 2000).

Vivienda

La construcción y entrega de viviendas puede convertirse en un programa útil si hay recursos suficientes. En El Salvador el programa se implementó sólo de forma parcial por falta de capacidad estatal y escasos recursos. En cambio en Nicaragua se hicieron brigadas de construcción con dinero de donantes internacionales que sirvieron para generar empleo e ingresos rápidamente.

Manejo y coordinación interinstitucional

La administración de los programas debe aprovechar la burocracia estatal existente siempre y cuando sus responsabilidades frente a DDR sean claras. Es útil diseñar esquemas para que los desmovilizados mismos participen en la definición y ajustes de la reinserción y tener un comité de alto nivel, con capacidad de decisión, que haga seguimiento al proceso y se reúna con relativa frecuencia. Muchas de las actividades relacionadas con la reintegración económica, como la creación de micro-empresas o proyectos productivos, ya existen como políticas públicas –son comunes en países en desarrollo. Por ello, para aprovechar los recursos y el conocimiento existente y para movilizar al Estado hacia el cumplimiento de los programas de inserción, es ventajoso apoyar la reintegración a través de las agencias existentes. Es indispensable, sin embargo, no olvidar las particularidades de la reinserción y de los desmovilizados: algunos procesos no pueden tener los mismos trámites, deberán ser ágiles y ser objeto de cuantificación y análisis por separado de los programas de rutina con el fin de hacer balances y cambios oportunos.

En El Salvador, dado que los Acuerdos de Paz no habían definido los programas de reinserción, se creó un grupo de alto nivel para negociar y diseñar los programas, conformado por la Secretaría de Construcción Nacional del gobierno, y del FMLN tres instancias, la Comisión de Tierras, la Secretaría de Construcción y Desarrollo y la Fundación 16

de Enero. ONUSAL también asistió como observador. Aún cuando la negociación permanente fue dispendiosa y dificultaba la concertación, la existencia de dicho comité demostró ser útil para coordinar a las diferentes agencias del Estado, mantener canales de comunicación entre el gobierno, el FMLN y la comunidad internacional y hacer seguimiento con auditorías periódicas - práctica que contribuyó a minimizar la desviación de fondos.

Organización y gestión de los desmovilizados

La organización de los desmovilizados en ONG o partidos políticos puede facilitar las gestiones administrativas de la reinserción y servir como red de apoyo al grueso de los desmovilizados. Sin embargo, esto no garantiza el éxito de los programas, especialmente si la calidad de los servicios técnicos suministrados es deficiente.

Cuando hay una desmovilización colectiva, y dependiendo de la articulación política del grupo armado, es más factible que los ex-combatientes creen organizaciones con fines sociales y partidos políticos. Estos pueden ser útiles para identificar la población beneficiaria, servir de puente de comunicación entre el gobierno y la base del grupo armado, ejecutar proyectos, organizar cooperativas y gestionar fondos de otras ONG a nivel local o internacional e incluso recursos de cooperación bilateral. Las organizaciones sociales o políticas además ayudan en la transición porque ofrecen estructuras alternas a las relaciones de mando de la época de guerra con personas en las que tienen confianza. El FMLN no sólo creó las tres instancias mencionadas para negociar con el gobierno (la Comisión de Tierras, la Secretaría de Construcción y Desarrollo y la Fundación 16 de Enero), sino que sus integrantes conformaron cerca de 170 ONG ejecutoras del Plan de Reconstrucción Nacional que ayudaron como intermediarias entre el gobierno y los desmovilizados. Sin embargo, el gobierno de Cristiani no siempre estuvo dispuesto a financiar a las ONG pensando que estaría fortaleciendo la futura competencia política. En Colom-

bia ha habido experiencias similares con Compaz (M-19), Sol y Tierra (Quintín Lame), Corpadeq (PRT), Progresar (EPL) y la Fundación Arco Iris y Nuevo Arco Iris (CRS). Los resultados en términos de éxito de programas económicos han sido mixtos, pero la existencia de organizaciones fue útil para todos, especialmente en las primeras fases, para generar referentes de apoyo para los ex-combatientes.

Esta posibilidad de asociación es más compleja en el caso de la desmovilización individual en Colombia. La falta de una red social de apoyo, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones de retorno a su hogar y la continuidad del conflicto, han sido notorias. Poder asociarse en grupos también ayudaría a enfrentar mejor el estrés pos-traumático del conflicto y el diseño e implementación de los planes de negocio a través de cooperativas.

De todos modos, entre los expertos en DDR no hay consensos sobre si los ex-combatientes deberían romper o no con sus relaciones grupales durante la reinserción. Unos piensan que es mejor su incorporación en comunidades que no hubieran estado involucradas en acciones violentas, con el fin de internalizar patrones distintos de comportamiento.

El rol del sector privado

Cuando el sector privado participa en la construcción de paz hay mayor probabilidad de éxito en los programas del post-conflicto. En El Salvador, el empresariado y su interés por acabar con el conflicto para tener un clima estable para los negocios fue definitivo para llegar a los Acuerdos de Paz. El presidente Cristiani era empresario y tenía vínculos con el sector industrial y de servicios, una base empresarial menos tradicional comparada con los antiguos terratenientes. Sin embargo, no hubo mayor involucramiento de los

empresarios en la reinserción de ex-combatientes. De acuerdo con las lecciones aprendidas en otras partes sobre programas de prevención de conflicto y construcción de paz¹⁵ es posible que el fracaso de muchos programas de reinserción económica en El Salvador, como la creación de micro-empresas, hubiera podido menguarse con una mayor participación del empresariado en dichas actividades.

Tanto en Colombia como en otros países se ha encontrado que el involucramiento del sector privado en diversos tipos de iniciativas sociales, en especial aquellas que buscan generar mayor empleo a través de actividades productivas, incrementa sus posibilidades de éxito. El sector privado no sólo tiene capital de inversión y dinero disponible para el emprendimiento social sino que tiene conocimiento técnico y habilidades negociadoras y administrativas, sabe dar un uso eficiente al tiempo y a los recursos financieros, está habituado a enfocar su gestión hacia la obtención de resultados y posee una importante red de contactos comerciales y acceso a las autoridades.

En Colombia, existen condiciones favorables para lograr una participación más activa del empresariado en DDR, pues en comparación con El Salvador hay una economía más grande y activa, un sector privado relativamente robusto y experiencias exitosas en responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, la tendencia predominante es que los empresarios sean reticentes a emplear directamente a la población desmovilizada, bien sea por preocupaciones de seguridad, porque hubieran sido víctimas directas de la violencia de la guerra, porque los desmovilizados no tienen la capacitación adecuada o por simple desconocimiento de DDR y el perfil de los desmovilizados y, por lo tanto, aprensiones frente a dicha población. No obstante, algunos empresarios han expresado su interés en ayudar a la reinserción de ex-combatientes de las guerrillas y las autodefensas, pero

¹⁵ Alexandra Guáqueta, *El papel del sector privado en la prevención del conflicto y la construcción de paz en Colombia: lecciones y desafíos*, reporte preparado para el Global Compact, Bogotá-New York, marzo, 2004.

hasta el momento no se han institucionalizado mecanismos claros para articular su aporte.

Es necesaria una campaña de comunicación de DDR, por un equipo de alto nivel con acceso presidencial, dirigida al empresariado. Ésta debe no sólo hacer pedagogía sobre DDR sino presentar opciones y modelos sobre cómo puede el sector privado ayudar a generar empleo y lograr la reincorporación integral de los desmovilizados.

El rol de la comunidad internacional

Organismos multilaterales y países amigos pueden cumplir roles claves en los procesos de paz, financiar DDR, ayudar en las negociaciones sobre los paquetes de reinserción y en la ejecución de programas específicos. Según expertos, de todas las tareas concretas que la comunidad internacional puede cumplir en la implementación de acuerdos de paz, el apoyo a DDR es el más importante. Sin embargo, es recomendable que el país receptor tenga claridad sobre los intereses domésticos en materia de paz con el fin de enrustrar la cooperación internacional, cree instancias de coordinación tanto al interior de la burocracia nacional como entre las agencias del Estado y los donantes, y que tenga expectativas realistas sobre los montos y tiempos de la ayuda.

En El Salvador, las Naciones Unidas, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suecia, Japón y la Comunidad Europea fueron los mayores donantes durante el post-conflicto, hasta el año 2000. La asistencia se destinó a varias actividades. Entre ellas estuvieron: corroborar el cese al fuego, supervisar las áreas de concentración y en general verificar el cumplimiento de los acuerdos; asistir la reforma constitucional y preparar y monitorear las elecciones de 1994; crear agencias oficiales y ONG encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos; crear la Policía Nacional y otros organismos de seguridad pública; promover el desarrollo de medios de comunicación independientes; reintegrar económicamente a los

desmovilizados del FMLN y los organismos de seguridad del Estado; y desarrollar otros proyectos de reconstrucción, por ejemplo, en infraestructura.

En el taller se trató sólo el rol de la comunidad internacional en los programas de reintegración. Los funcionarios de las agencias de cooperación de los países donantes, en especial Estados Unidos, y las Naciones Unidas participaron activamente en los comités encargados del diseño y ejecución de los programas de reinserción --aún cuando tanto el gobierno de Cristiani como el FMLN estuvieron de acuerdo en evitar su participación directa en el Programa de Reconstrucción Nacional para no supeditar la agenda interna a las acciones aisladas de los diferentes actores de la comunidad internacional. Fuera de los recursos, sus aportes fueron de carácter técnico y gerencial, y ayudaron a destrabar la concertación entre el FMLN y el gobierno con respecto a los componentes y los montos de los paquetes de reinserción. En la titulación y repartición de tierras, que fue tan sensible en el post-conflicto, la ONU y el Banco Mundial jugaron un rol mediador fundamental cuando las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre el tamaño y avalúo de los predios a repartir.

La participación de organismos internacionales o países extranjeros para facilitar acuerdos de paz no es nueva en América Latina pero sí en Colombia. Si hay algo que distingue las negociaciones recientes con las autodefensas y los fallidos acercamientos con las FARC y el ELN de los procesos de paz de los ochentas y noventas es la marcada presencia de actores externos. Actualmente, en cuanto al apoyo a DDR, existen varios retos políticos para Colombia. La paz de El Salvador fue un evento acogido y aplaudido tanto por europeos como Estados Unidos y los donantes no dudaron en apoyar el proceso. Sobre Colombia no se percibe la misma actitud. La comunidad internacional ha expresado fuertes reservas frente a los términos de la desmovilización de las autodefensas e incluso frente a la política de desmovilización individual, de ahí que el apoyo en recursos tanto al

Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior como a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sean limitados y se desembolsen con extrema cautela.

En el largo plazo, sin embargo, si se llegara a dar mayor asistencia, Colombia deberá balancear la utilidad política y financiera de la ayuda internacional con la reducción del margen de maniobra que inevitablemente se presenta por los diversos intereses externos. El reto administrativo consiste en canalizar la ayuda de manera transparente y enfocada y sin duplicación de esfuerzos. Fuera de la ayuda, en dinero o especie, la comunidad internacional también podría colaborar realizando un seguimiento de largo plazo de DDR.

V. Anexos

1. Programa taller “Lecciones de El Salvador”

Día 1, Viernes, 19 de noviembre, 2004

Instalación

Carlos Franco, Vicepresidencia de la República
Rodrigo Gutiérrez, Presidente del Comité Ejecutivo, FIP
Sergio Jaramillo, Director Ejecutivo, FIP

Los procesos de DDR en perspectiva comparada

Markus Koth, Bonn International Center for Conversion

Experiencias de El Salvador

- *Contexto político y lecciones generales*
Joaquín Villalobos, ex-comandante del FMLN
- *Perspectivas desde las Fuerzas Armadas*
Ponencia enviada por el General (r) Mauricio Vargas, ex-Comisionado Presidencial para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz
- *Organización del proceso de DDR y atención a los desmovilizados*
Claudia Nobleau de Anaya, ex-Directora de Programación y Evaluación del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de El Salvador; María Dolores Nobs, Asesora de la Dirección de la Secretaría de Reconstrucción Nacional y Ana Guadalupe Martínez, FMLN
- *Reinserción económica: éxitos y fracasos*
Mercedes Letona, FMLN y Ana Sonia Medina, FMLN
- *Rol de la comunidad internacional*
Claudia Nobleau de Anaya, ex-Directora de Programación y Evaluación del Plan de Reconstrucción y Ana Guadalupe Martínez, FMLN

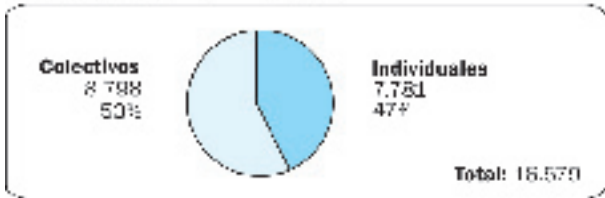
Día 2, Sábado, 20 de noviembre, 2004

Mesa redonda

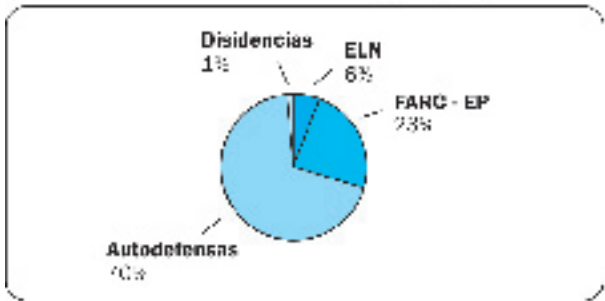
Delegación de El Salvador
Programa de Reincorporación a la Vida Civil, Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa
Dirección de Justicia y Seguridad, Departamento Nacional de Planeación
Fundación Ideas para la Paz

2. Cifras de las desmovilizaciones individuales y colectivas en Colombia agosto 2002 - julio 2005

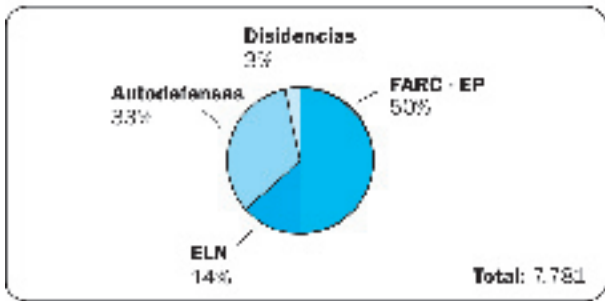
Total de desmovilizados



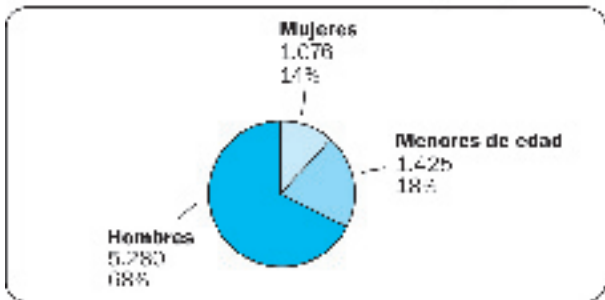
Total de desmovilizados según grupo



Desmovilizados individuales según grupo



Desmovilizados Individuales según población



3. Desmovilizaciones colectivas - Autodefensas noviembre 2003 - julio 2005

1. Bloque Cacique Nutibara	25/11/2003	868	Medellín (Antioquia)
2. Autodefensas Campesinas de Ortega	07/12/2003	168	Municipio de Cajibío (Cauca)
3. Bloque Bananero de las AUC	25/11/2004	447	Finca La Macarena, del corregimiento El Dos, municipio de Turbo, Urabá (Antioquia)
4. Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando	04/12/2004	47	Corregimiento de Santa Rosa, municipio de Santa Ana (Magdalena)
5. Bloque Cundinamarca de las AUC	09/12/2004	148	Corregimiento de Teran, municipio de Yacopí (Cundinamarca)
6. Bloque Catatumbo de las AUC	10/12/2004	1.425	Corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú (Norte de Santander)
7. Bloque Calima de las AUC	18/12/2004	557	Finca "El Jardín", ubicada en el corregimiento de "Galicia", municipio Bugalagrande (Valle del Cauca)
8. Bloque Sinú-San Jorge de las AUC	18/01/2005	925	Corregimiento de Santa Fe de Ralito, municipio de Tierralta (Córdoba)
9. Bloque Suroeste Antioqueño de las AUC	30/01/2005	125	Corregimiento Alfonso López, del municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia)
10. Frente Mojana	02/02/2005	110	Corregimiento Nueva Esperanza, municipio de Guaranda (Sucre)
11. Bloque Héroes de Tolová	15/06/2005	465	Vereda La Rusia Ocho, del municipio Valencia (Córdoba)
12. Bloque Montes de María	14/07/2005	594	Corregimiento San Pablo, del municipio de Marialabaja (Bolívar)
13. Bloque Libertadores del Sur (BCB)	30/07/2005	677	Finca "El Romance", ubicado en la Inspección de Policía El Tablón, del municipio de Taminango (Nariño)
14. Bloque Héroes de Granada	01/08/2005	2.033	Finca 'La Mariana' del corregimiento de Cristales, jurisdicción del municipio de San Roque (Antioquia)
15. Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada	06/08/2005	209	Finca "La María", Vereda San Miguel, municipio de Puerto Gaitán (Meta)
TOTAL		8.798	



